

El desafuero de AMLO dentro del tiempo corto de la historia

Luis H. Méndez B.*

No vamos a calificar la historia mexicana, a partir de 1983, como un tiempo corto caprichoso que expresa la más engañosa de las duraciones; tampoco vamos a entenderla como una historia de los acontecimientos que causa desconfianza al historiador por su liviandad, por su ligereza. Sí creemos, con Braudel, que es lícito desprenderse del “tiempo exigente de la historia”, y comprendemos también la exigencia de volver a él con otra mirada, con otras inquietudes, con otras preguntas. Sólo que, pensamos, en este caso, todos los niveles, todos los miles de niveles, todas las miles de fragmentaciones del tiempo de la historia, que durante tanto tiempo se comprendieron a partir de la profundidad, de la semiinmovilidad de la estructura creada por el nacionalismo revolucionario, ya no se comprenden, al menos de manera total, a través de ella. Los acontecimientos ya no gravitan de lleno en torno a ella, pero tampoco existe otra densidad histórica donde se comprendan cabalmente. Vivimos un tiempo de indefinición donde, creemos, comienza a construirse un nuevo tiempo largo, una nueva estructura, quién sabe de cuánta duración, y, seguramente, dadas las premisas de la nueva modernidad capitalista, con poca capacidad de lograr estabilidad a las futuras generaciones.

El problema

Seducida por poderes externos apoyados en una muy libertina manera de interpretar la ley, la Cámara de Diputados, por mayoría y por consigna partidaria, “decidió”, con éxito, desaforar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. “El Gobierno del Cambio” descabezó a la “Ciudad de la Esperanza”. ¡Es un simple acto jurídico orientado a hacer cumplir la ley!

* Profesor-Investigador, Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco.

¡No podemos olvidar que vivimos en un estado de derecho! ¡Nadie por encima de la Constitución!, se nos hizo saber repetidamente en diversos tonos, espacios y tiempos. Sin embargo, se sospechó desde siempre, en ésta nuestra democracia imperfecta, la “responsable” disposición al cumplimiento del orden jurídico de la que tanto nos habló la autoridad, mostró en realidad como el poder en turno, con el incondicional apoyo de las dirigencias partidarias del PRI y del PAN, pugnaron —y pugnan— por imponerse, de cualquier manera y a cualquier precio, sobre la voluntad de parte importante de la ciudadanía que parece, de

momento, inclinarse hacia una solución de izquierda para enfrentar los desafíos que hoy enfrenta el país.

Pero no existe fenómeno social que no exhiba a su contrario. Nuestro recién iniciado tiempo de coyuntura, surge de un conjunto de conflictos políticos, intencionadamente no resueltos, que nos revelan una inquietante posibilidad: el afianzamiento del carácter autoritario de un régimen todavía en formación; sin embargo, este proceso de endurecimiento autoritario desde la sociedad política, devela también otra posibilidad: que la enorme fuerza que emerge de una movilización social sin precedentes,

obligue a la clase política mexicana a llegar a acuerdos mínimos que permitan no sólo una transmisión pacífica de poderes en el 2006, sino que facilite también la construcción de un gran pacto social que pague la deuda que los políticos de este país le deben a la sociedad mexicana: la reforma del Estado, el afianzamiento de un régimen; en consecuencia, la credibilidad en las instituciones, el fin de un largo periodo de vacío político, de ingobernabilidad. La gran posibilidad: que nuestra embrionaria democracia procedimental comience a incursionar en los hasta hoy prohibidos espacios de la sociedad.

De momento, la decisión presidencial —nada democrática por cierto—logró distender un conflicto político que amenazaba con desbordar los frágiles límites legales de un orden en formación. Sin embargo, contrariando la mediática campaña oficial y la insípida reunión entre los dos contrincantes políticos, la autoritaria disposición de un presidencialismo encubierto, no garantiza que termine la embestida en contra de un candidato y un proyecto de izquierda con posibilidades de triunfo en las elecciones presidenciales del 2006. Es evidente que la derecha, política y social, el PRI del descompuesto nacionalismo revolucionario, y poderosos grupos empresariales involucrados en confusas, y presuntamente ilegales, operaciones financieras a través del Fobaproa, no habrán de detenerse en sus propósitos por la decisión del Ejecutivo Federal. El conflicto tomará otros derroteros, y lo único de lo que si podemos estar seguros, es que continuaremos siendo atentos y preocupados observadores, o movilizadas ciudadanas, de una confrontación que verá rebasados los estrechos límites de nuestra democracia. En los siguientes meses seremos testigos de una lucha por el poder donde el objetivo central será eliminar al adversario. No veremos un encuentro de ideas, una discusión de proyectos o programas a ser difundidos y discutidos por los diversos contrincantes políticos en las diferentes arenas, para, después, ser electoralmente sancionados por el voto ciudadano, no, la intención será aniquilar al contrincante con posibilidades de triunfo —en este caso al Jefe de Gobierno del Distrito Federal— a aquel que tenga la sensibilidad política y el apoyo popular suficiente para crear el ansiado —y desde hace más de veinte años ausente— proyecto de nación que suavice, en beneficio de la mayoría de mexicanos, nuestro accidentado camino por el mundo global.

En este contexto, el presente trabajo no pretende imaginar escenarios políticos para los próximos meses, la finalidad se centra más bien en tratar de explicar por qué llegamos a este inquietante tiempo de coyuntura.

Un poco de historia contemporánea

Si tomamos, siguiendo a Braudel, el tiempo largo y el tiempo corto en la historia, como unidad de análisis del alterado momento político que hoy vive el país, tendremos por fuerza que retornar ese 1 de septiembre de 1982, último Informe de Gobierno del presidente López Portillo, cuando, con una crisis económica encima —hasta ese momento la más severa—, decidió nacionalizar la banca.

A pesar de su importancia, el acontecimiento pareció de inicio un recurso político que se inscribía en el tiempo largo de nuestra historia: en la sólida estructura que formó una revolución como la mexicana; en el particular sistema político que, reñido con el régimen constitucional, legítimo, a pesar de su evidente autoritarismo, de sus prácticas corruptas y clientelares, de la impunidad en las acciones de gobierno, de la existencia de un partido casi único, y de su acostumbrada política electoral antidemocrática, a los llamados gobiernos de la Revolución durante ocho sexenios. Así pareció al menos durante los agitados meses que mediaron entre este hecho y la toma de posesión del nuevo presidente de la República: Miguel de la Madrid Hurtado.

A partir de este momento, los acontecimientos propios de un tiempo corto de la historia, comenzaron a no encontrar explicación en el tiempo largo. Se percibió la posibilidad del fin del nacionalismo revolucionario y el surgimiento de un nuevo orden neoliberal encaminado a inscribir a México en las hasta entonces ignotas aguas del mundo global. El mito fundante de la nación mexicana: la Revolución, parecía dejar su sitio, en la centralidad del ámbito de lo sagrado, a un nuevo absoluto social: el mercado. Al no encontrarse representados simbólicamente en el tiempo largo de nuestra historia, los acontecimientos comenzaron a entrelazarse de una manera diferente: todo indicaba que en México se estaba construyendo un nuevo tiempo largo, una nueva estructura histórica que, se imaginó, quedaría representada en el absoluto social mercado. Poco a poco, paso a paso, el nuevo gobierno, y los que le continuaron, se empeñaron en desestructurar los valores legitimantes del nacionalismo y sustituirlos por los nuevos valores, igualmente axiomáticos, del mercado. No lo lograron del todo, y los resultados hasta hoy han sido nefastos para el país.

Desde el inicio del nuevo tiempo histórico, que algunos llaman transición y otros llamamos pertenencia obligada al mundo global, se insistió en una tarea impostergable, todavía inconclusa: la reforma del Estado. Es obvio, si el nuevo absoluto social mercado no construía sus propias

instituciones, sus valores no iban a estar lo suficientemente legitimados para imponerse al conjunto de la sociedad mexicana, y lo que resultaba peor, habrían de mantenerse en constante lucha con el viejo nacionalismo que, desplazado de la centralidad de lo sagrado, seguía luchando por mantener vivas sus representaciones simbólicas.

Así fue como sucedió. La gran tarea de construir un nuevo pacto social legitimante requería de una reforma del Estado que nunca llegó. Más allá de las reformas electorales, las viejas instituciones no se modificaron y cada vez mostraban más su insuficiencia para validar las nuevas políticas de un orden neoliberal en construcción que no podía terminar con su adversario: el nacionalismo revolucionario. La economía se estancó y la vida política del país se volvió cada vez más inestable, y mientras la riqueza nacional se concentraba en cada vez menos manos, la pobreza y la falta de oportunidades de los mexicanos se extendía a lo largo y ancho del país.

Hasta hoy, después de más de dos décadas que la clase política en México se debate inútilmente por construir un nuevo orden, después de casi cinco lustros empeñados por destruir las estructuras y los valores del nacionalismo revolucionario, después de veintitrés años de batallar por imponer una economía de mercado, los resultados no han sido para nada satisfactorios. ¿Cuántas asignaturas pendientes guarda todavía nuestro expediente histórico? ¡Muchas! Es cierto, nuestra inserción al mercado global es un hecho, y muchos de los acontecimientos que a diario registra el país, en especial los económicos, ya no pueden ser explicados por nuestra vieja estructura histórica, pero no menos cierto resulta el hecho de que cantidad de acontecimientos, casi todos de índole política y social, aún encuentran su explicación en aquellas resistentes redes de significación cuya urdimbre formó nuestra cultura nacional después de una revolución popular. Mito creador de una patria que todavía hoy sigue determinando gran parte de nuestros comportamientos sociales. En estas condiciones ¿cómo vivir tratando de ser alguien diferente y al mismo tiempo no abandonar muchas de nuestras tradicionales formas de ser?; o lo que es peor, ¿cómo terminar viviendo sin ser lo uno ni lo otro?; ¿cómo reencontrar nuevas formas de identidad social cuando la realidad económica y política del país se ha encargado de construir híbridos? No sabemos quienes somos y mucho menos sabemos a ciencia cierta hacia donde vamos. Nuestros comportamientos están guiados por la ambigüedad y la ambivalencia. Sin pacto nacional que aglutine, sin proyecto nacional que guíe, y trastocados los valores que legitiman un orden, hoy, un

acontecimiento político sin razón ni juicio —en muchos aspectos grotesco—, propio de un tiempo incierto, contingente y riesgoso —el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, Jefe del Gobierno del Distrito Federal— parece obligar a la sociedad política, y a poner en estado de alerta a la sociedad civil, para enfrentar el momento histórico que se avecina y que, con seguridad, exigirá definiciones. Se aproxima una coyuntura, un momento privilegiado de nuestra historia, que si bien es cierto puede abrir nuevas posibilidades para puntualizar un proyecto nacional que nos defina al interior y al exterior, también puede contribuir a desdibujar aún más nuestras identidades, o lo que es aún peor, puede convocar igualmente al nunca suficientemente exorcizado fantasma de la crisis económica y a sus catastróficas consecuencias para la sociedad mexicana en su conjunto.

El momento de indefinición en la construcción de un nuevo tiempo largo

Escarbando un poco más en la dialéctica que establecen los tiempos largos y los tiempos cortos en la historia, Braudel nos asegura que estos últimos pueden atraparse en el término de *acontecimiento*, esto es, todos aquellos sucedidos “explosivos y tonantes”, todo aquel episodio que “echa tanto humo que llena la conciencia de los contemporáneos, pero apenas dura, apenas se advierte su llama”. Es un tiempo episódico hecho a la “medida de los individuos, de la vida cotidiana, de nuestras ilusiones, de nuestras rápidas tomas de conciencia; el tiempo por excelencia del cronista, del periodista”. Es el tiempo de lo instantáneo. Es el tiempo de la *coyuntura* “que para estudiar al pasado lo divide en amplias secciones, decenas, veintenas o cincuentenas de años”¹.

El pasado está, pues, constituido, en una primera aprehensión, por esta masa de hechos menudos, los unos resplandecientes, los otros oscuros e indefinidamente repetidos...Pero esta masa no constituye toda la realidad, todo el espesor de la historia...el tiempo corto es la más caprichosa, la más engañosa de las duraciones. Este es el motivo de que exista entre nosotros, los historiadores, una fuerte desconfianza hacia una historia tradicional, llamada historia de los acontecimientos...la historia de estos últimos cien años, centrada en su con-

¹ Fernand Braudel, *La historia y las ciencias sociales*, Alianza Editorial, Madrid-México, 1989, pp. 64-65.

junto sobre el drama de los <<grandes acontecimientos>>, ha trabajado en y sobre el tiempo corto².

El tiempo corto, asegura Braudel, pierde su sentido sino se inserta en el tiempo largo, sino busca su explicación en lo que llama el espesor de la historia, la *estructura* que domina los problemas de la larga duración:

Los observadores de lo social entienden por *estructura* una organización, una coherencia, unas relaciones suficientemente fijas entre realidades y masas sociales. Para nosotros, los historiadores, una estructura es indudablemente un ensamblaje, una arquitectura; pero, más aún, una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en transportar. Ciertas estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten en elementos estables de una infinidad de generaciones: obstruyen la historia, la entorpecen y, por tanto, determinan su transcurrir. Otras, por el contrario, se desintegran más rápidamente. Pero todas ellas, constituyen, al mismo tiempo, sostenes y obstáculos³.

Entender la historia de esta manera, compromete a aceptar la existencia, dice Braudel, de un tiempo frenado, a veces incluso en el límite de lo móvil. Por supuesto, acepta que es lícito desprenderse del “tiempo exigente de la historia” pero siempre con la obligación de volver a él con otra mirada, con otras inquietudes, con otras preguntas. “Todos los niveles, todos los miles de niveles, todas las miles de fragmentaciones del tiempo de la historia, se comprenden a partir de esta profundidad, de esta semiinmovilidad; todo gravita en torno a ella”⁴.

Evidentemente, y esto debe quedar muy claro, esta estructura que abriga el tiempo largo, esta semiinmovilidad de lo histórico, no es sinónimo de eternidad. Por la ciencia política sabemos que todos los equilibrios históricos son inestables, proclives a las rupturas, y si bien es cierto que estas aparentes armonías sociales catastróficas pueden ser explicadas desde la densidad de la historia, no menos cierto es que, con más o menos frecuencia, los acontecimientos del tiempo corto se confabulan contra el tiempo largo, dejan de explicarse del todo en él, y surge la posibilidad de su desgaste, surge la eventualidad de que la sólida estructura de la historia comience a resquebrajarse, surge la oportunidad que, desde lo social, se inicie la cons-

² *Idem*, p. 66.

³ *Idem*, p. 70.

⁴ *Idem*, p. 74.

trucción de un nuevo tiempo, de una nueva estructura histórica, desconociendo la densidad o la semiinmovilidad que pueda llegar a alcanzar. El equilibrio lentamente construido por la historia en una estructura que simula interrumpir el paso del tiempo, puede ser alterado por acontecimientos que obligan a poner todo en tela de juicio.

Braudel menciona que, a partir del siglo XIV, el desarrollo del capitalismo comercial construyó, paso a pasito, una sólida estructura histórica que explicó, por más de cuatro siglos, los acontecimientos del tiempo corto. Su eficiencia semiinmovilizadora duró hasta que, en el siglo XVIII, la revolución industrial generó un sinnúmero de acontecimientos —explosivos y tonantes algunos, oscuros y repetidos los más— que, al no inscribirse ni explicarse desde el tiempo largo, fueron más allá de lo instantáneo, lograron permanencia e iniciaron la construcción de un nuevo tiempo histórico, la sociedad industrial, que descifró los acontecimientos del tiempo corto hasta casi finalizar el siglo XX.

Con esta misma lógica, vamos a considerar que desde el tiempo largo de nuestra historia nacional, que comienza a construirse a partir de la Revolución de 1910; desde la estructura histórica —el nacionalismo revolucionario— que tejió, día con día, sus semiinmovilizadoras redes durante buena parte del siglo pasado, se pueden explicar los deslumbrantes y oscuros acontecimientos del tiempo corto. Las coyunturas militares y políticas del violento tiempo de incertidumbre creado por las diversas fracciones revolucionarias en lucha, las definiciones jurídicas alcanzadas, las acciones realizadas por los gobiernos revolucionarios, las soluciones corporativas, las diversas formas de respuesta social expresadas, así como las nuevas visiones del mundo construidas desde el poder y reconstruidas desde lo social, adquirirían certidumbre explicativa al inscribirse dentro de la lógica del orden nacionalista.

El problema se suscita al momento que los acontecimientos del tiempo corto pierden transparencia cuando a la estructura histórica nacionalista se le dificulta interpretarlos. Resulta difícil marcarle fecha de inicio a un proceso histórico, pero, en aras del orden, partiríamos de 1983, año en que, explícitamente, comenzaron a cuestionarse, y a tratar de reemplazar, los pilares que le daban coherencia y entendimiento al orden nacionalista. Nos referimos en especial, a todos aquellos momentos en que el poder en turno toma acciones diversas para sustituir la figura del Estado interventor, de la economía mixta y del modelo de desarrollo sustitutivo; cuando el nuevo poder, con preten-

siones de imponer políticas de libre mercado, plantea la necesidad de reformar al Estado; cuando las nuevas élites políticas intentan insertar al país dentro de las modalidades impuestas por el orden global, y, principalmente, cuando se advierte que nuestro Estado-nación se debilita, cuando se percibe que los poderes globales, detentados por grupos e instituciones transnacionales, le imponen a los gobiernos mexicanos los rumbos que debe seguir su política económica y los nuevos valores axiomáticos que la legitimen (democracia procedimental, ciudadanía de la sociedad civil, derechos humanos, propiedad privada, calidad total, libertad de consumo, etc.).

Sin embargo, el hecho de que surjan acontecimientos propios del tiempo corto que tienden a agotar el tiempo largo, no significa que, de manera automática, se transforme la estructura histórica que creó el nacionalismo revolucionario. A partir de 1983, comenzamos a vivir un tiempo indefinido. Los acontecimientos, esplendorosos y oscuros que forman el tiempo de la historia, ya no encajaban en el tiempo largo, pero tampoco se definía con claridad la construcción de una nueva estructura histórica. La incertidumbre se enseñoreó del devenir histórico. Todo parece indicar, por la cualidad de los acontecimientos experimentados a lo largo de más de dos décadas, que comienza a construirse una nueva estructura histórica, un nuevo tiempo largo, y que este inicio está señalado por la ambigüedad y la ambivalencia que muestra su proceso de construcción. Los hechos expresan cotidianamente su separación del equilibrio lentamente construido por la estructura histórica nacionalista, en consecuencia, todos los días se nos exige poner todo en tela de juicio. Es cierto, a través de coyunturas y periodos se escribe una historia del presente. Sólo que, en este caso, nos parece que esta historia superficial, en términos de Braudel, comienza a entrelazar redes de significación que consolidan un nuevo tiempo histórico, una nueva estructura, hasta hoy, indefinida.

No vamos a calificar entonces la historia mexicana, a partir de 1983, como un tiempo corto caprichoso que expresa la más engañosa de las duraciones; tampoco vamos a entenderla como una historia de los acontecimientos que causa desconfianza al historiador por su liviandad, por su ligereza. Sí creemos, con Braudel, que es lícito desprenderse del “tiempo exigente de la historia”, y comprendemos también la exigencia de volver a él con otra mirada, con otras inquietudes, con otras preguntas. Sólo que, pensamos, en este caso, todos los niveles, todos los miles de niveles, todas las miles de fragmentaciones del tiempo de la historia, que durante tanto tiempo se comprendieron a

partir de la profundidad, de la semiinmovilidad de la estructura creada por el nacionalismo revolucionario, ya no se comprenden, al menos de manera total, a través de ella. Los acontecimientos ya no gravitan de lleno en torno a ella, pero tampoco existe otra densidad histórica donde se comprendan cabalmente. Vivimos un tiempo de indefinición donde, creemos, comienza a construirse un nuevo tiempo largo, una nueva estructura, quién sabe de que duración, y, seguramente, dadas las premisas de la nueva modernidad capitalista, con poca capacidad de lograr estabilidad a las futuras generaciones.

Nuestro caprichoso tiempo corto

Nuestro tiempo corto, entendido como tiempo de indefinición en el trecho histórico antes mencionado, desteje y teje un tiempo largo desde el impacto provocado por una interminable sucesión de acontecimientos, de toda índole, que transformaron, sin modificarlo del todo, el perfil del país. Describirlos resulta imposible, tratar de entenderlos desde las consecuencias producidas por coyunturas y periodos nos parece más adecuado.

Si pensamos en la coyuntura como un momento de la realidad que se nos impone, como un acontecimiento que, en su momentáneo esplendor, condensa las contradicciones políticas de un periodo que busca resolverse, como un instante privilegiado de la historia presente que advierte sobre las posibilidades de cambio en las formas como se ejerce el poder, pero sobre todo, como una circunstancia histórica especial en tanto que muestra fenómenos no explicables del todo desde el tiempo largo, tenemos que desandar el camino recorrido y detenernos en aquel 1 de septiembre de 1982, último informe de gobierno del presidente López Portillo, cuando en la dramática caída del orden creado por la Revolución Mexicana, se anuncia, como colofón populista de un régimen autoritario, la nacionalización de la banca. Extraño y paradójico inicio de un nuevo e indefinido tiempo histórico: con un acto de poder, la nacionalización bancaria, se inicia la aventura neoliberal en México.

El momento fue desastroso. No sólo la economía nacional se había entrampado, también la representación simbólica del presidencialismo mexicano se puso en entredicho. El Estado de la Revolución perdía legitimidad. De nada le valió al presidente López Portillo la intensa movilización de las fuerzas corporativas del régimen, y mucho menos adquirió forma la difusa idea de un retorno cardenista difundida desde importantes bastiones nacionalistas, priístas e izquierdistas, incrustados en importantes espacios políticos, inte-

lectuales y sociales. Con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia de la República, se marcaron, prácticamente de inmediato, los nuevos derroteros que desde el poder trasnacional se le señalaban al país.

El 1 de septiembre de 1982 fue una coyuntura. Ante la enormidad de la crisis que vivía la nación en su conjunto, este momento estelar de la política nacional nos advirtió sobre la posibilidad de imponer nuevas formas de ejercer el poder en México, emergencia que no se transparentó hasta la llegada del nuevo equipo gobernante. Después de cuatro meses de incertidumbre donde el rumor, la acción corporativa irreflexiva, la prepotente maquinación empresarial, la precipitada respuesta del entonces llamado sindicalismo independiente y el inconsistente comportamiento de diversos sectores de la izquierda mexicana, impidieron reparar en las reiteradas anunciaciones que formulaba el entorno político nacional y que exigían de los diversos actores sociales involucrados prácticas diferentes para enfrentar las nuevas realidades.

Con Miguel de la Madrid, se definieron cuales eran los retos del periodo abierto por la coyuntura: cambio estructural, renovación moral y reconversión industrial, que en buen cristiano significaban un primer esfuerzo por dismantelar el viejo orden nacionalista representado por el Estado interventor y la economía mixta, quedando en la ambigüedad el saber si el paquete de cambio incluía también la transformación del sistema político presidencialista sustentado en los derechos metaconstitucionales del Ejecutivo Federal. Pronto supimos que no habría de ser así... Aunque tampoco volvería a ser como antes. El autoritarismo presidencialista habría de continuar, aunque ahora era otro el objetivo: insertar a México en el mundo global de acuerdo a las instrucciones recibidas desde el exterior por una nueva élite política que creyó en un cambio hacia la economía de mercado sin comprometer demasiado las bondades de un régimen autoritario todavía considerado útil para avanzar en la nueva aventura.

La coyuntura del 1 de septiembre de 1982, así como las acciones definitorias que el nuevo gobierno le dio al periodo, no pueden ser interpretadas como acontecimientos luminosos, espectaculares, que sólo por un instante alumbraron el escenario político nacional para después desvanecerse en las intrincadas redes de la estructura histórica creada por el nacionalismo revolucionario. No, sus efectos expresaron propósitos que rompían con la lógica del tiempo largo de la historia nacional. Al tiempo corto le contrariaba ya el sentido del tiempo largo que se tejió desde el movimiento armado de 1910.

Por supuesto, ningún proceso de orden social es lineal, y mucho menos cuando se inscribe en la comprometida ruta de un cambio. Los retos que lanzó la coyuntura del 1 de septiembre de 1982 no fueron satisfechos en su totalidad, ni siquiera a nivel aceptable, suficiente para haber consolidado un nuevo régimen. En este primer periodo de nuestra forzada inserción al mundo global, que muchos llaman transición a la democracia, no se pudo definir un rumbo cierto. Nadie duda que se avanzó en el dismantelamiento del orden anterior, sobre todo en lo referente a políticas económicas, pero el gobierno en turno y los diferentes actores sociales que apoyaban el cambio se vieron incapacitados para construir una nueva hegemonía sustentada en nuevos consensos. La resistencia social y el enfrentamiento político dificultaron la metamorfosis, pero sobre todo, la fragilidad de un aparato productivo que no pudo fortalecerse en el marco de una economía de mercado. Productividad, competencia y flexibilidad laboral sólo alcanzaron a una pequeña parte de la planta productiva nacional.

El caso es que para fines de 1987, un año antes de que terminara el sexenio delamadridista, nuestro agitado e incierto tiempo histórico volvió a convulsionarse. Otra vez se construía un nuevo tiempo de prevención que nos advertía sobre la posibilidad de una nueva coyuntura. De nueva cuenta, la economía enloqueció: para el 31 de diciembre la inflación alcanzó el 150%, el peso se devaluó en un 42% respecto al dólar y el valor adquisitivo del salario perdió un 48%; y por si esto no fuera suficiente, un mes antes la concesión presidencial al capital financiero para que manejara una banca paralela a través de casas de bolsa terminó en un sonado y probado fraude. En el mes de noviembre la Bolsa Mexicana de Valores se declaró en quiebra. Algo resultaba evidente: más allá de la nueva racionalidad jurídica y programática establecida, poco, muy poco se había avanzado en el cambio estructural, meta prioritaria del primer gobierno del cambio. La reconversión industrial era lenta y la inversión productiva escasa; la actividad financiera, fuente casi exclusiva de la reproducción del capital, crecía con base en una descontrolada acción especulativa; en el aspecto político, pervivía el presidencialismo metaconstitucional, el partido mayoritario y los viejos esquemas de dominación corporativa; en el aspecto social, se acentuó la pérdida del salario, del empleo y de las conquistas laborales sin acceder al nuevo esquema laboral propuesto por el nuevo patrón de acumulación de capital secundario exportador. En suma, el acceso a la nueva modernidad capitalista continuaba siendo proyecto.

La solución implementada desde el poder en turno fue la creación de un Pacto de Solidaridad Económica (PSE) donde el gobierno se comprometía en lo esencial a reducir su gasto programable, suprimir subsidios, incrementar la política privatizadora del sector paraestatal y racionalizar sus estructuras administrativas; los obreros, corporativamente representados por el Congreso del Trabajo, declinaron en su propuesta de aumento salarial y aceptaron la exhortación al sector empresarial para un aumento de emergencia; los campesinos aceptan mantener sus productos a precios de garantía reales, y los empresarios se obligan —sólo moralmente— a aumentar la oferta de productos básicos, a elevar la eficiencia de la planta productiva y a moderar la variación de precios tomando en cuenta los márgenes de comercialización.

El camino modernizador, destinado a crear una economía de mercado inserta en un mundo global, avanzaba a tropezones, y las resistencias sociales y políticas al nuevo modelo inquietaban a la nueva clase política preocupada por construir el nuevo régimen. La ruptura en 1986 del Movimiento de Renovación Democrática al interior del PRI, creó las condiciones necesarias para fundar un Frente Democrático Nacional que, de inmediato, se situó como la gran fuerza política opositora en la lucha por la presidencia de la República, reivindicando los valores del nacionalismo revolucionario. Los desarraigados militantes priístas junto a las heterogéneas fuerzas de la izquierda mexicana, con el apoyo de destacamentos sociales importantes provenientes del llamado sindicalismo independiente y de amplios sectores inscritos en el movimiento urbano popular, habrían de protagonizar uno de los acontecimientos políticos más importantes de este tiempo histórico indefinido.

Los pobres resultados alcanzados por el gobierno de Miguel de la Madrid en la construcción de un orden alternativo, combinados con diversas formas de descontento social que a finales de sexenio lograron confluír en una opción política organizada, crearon una particular situación política que, el 6 de julio de 1988, tomaría la forma de una coyuntura. De nueva cuenta la realidad se nos impuso: o las fuerzas políticas en el poder triunfaban electoralmente y proseguían la edificación de un nuevo régimen sustentado en una economía de mercado abierta al exterior, o las fuerzas de oposición organizadas en el Frente Democrático Nacional alcanzaban la victoria y retornaban al proyecto nacionalista del Estado interventor en la economía y benefactor en lo social. El resultado lo conocemos de sobra, pero más desde el imaginario social que

desde las pruebas duras, interesadamente ocultas desde la acción de un poder público visible con enormes capacidades de enmascaramiento.

Los primeros resultados de la elección dieron el triunfo al candidato priísta en medio de un escándalo político por un presumible fraude, orquestado desde la Secretaría de Gobernación, que convirtió durante meses el recinto legislativo en campo de batalla. Desde el día siguiente de la votación ciudadana quedó claro el hecho de que la coyuntura no se había resuelto y que se iniciaba la primera etapa de un nuevo periodo determinada por la incertidumbre. La interrogante establecida desde las campañas electorales seguía en pie. Persistía la duda de si tocaba fondo el proyecto neoliberal del priísmo renovado que impulsaba la transformación del régimen anterior, expresada durante el sexenio en una política económica de austeridad a la que desde el anonimato del voto los ciudadanos del país mostraron su rechazo, o se hacía realidad la posibilidad política de cambios cualitativos en el sistema de dominación generados desde la oposición de una nueva izquierda surgida desde el Frente Democrático Nacional.

En el vacío de poder existente entre las elecciones del 6 de julio y la toma de posesión del presidente electo el día 1 de diciembre —espacio y tiempo de una coyuntura que no definía el siguiente periodo— se vivieron meses de inquietante incertidumbre. Nada se pensaba como imposible, y entre desconcertantes reacomodos políticos emergidos de alianzas efímeras que nacían y se descomponían a la velocidad de una lucha por el poder que exigía definiciones inmediatas, se dudaba de la continuación del incipiente Pacto de Solidaridad Económica, se percibía lejana la solución a la aplastante deuda externa, se resquebrajaban los bastiones corporativos, se consolidaba el juicio de ilegitimidad del proceso electoral e, incluso, se corrían rumores de que el candidato del partido oficial no se sentaría en la silla presidencial. Para la desgracia de las fuerzas opositoras de la nueva izquierda mexicana, el rechazo ciudadano expresado en las urnas y la resuelta lucha parlamentaria posterior a las elecciones, no incluyeron la presencia de los movimientos sociales presumiblemente afines al proyecto opositor. La no presencia organizada de clases, sectores sociales y grupos diversos de la sociedad civil, que de diferentes formas se opusieron a la política de austeridad económica del gobierno, junto a la decisión estratégica del Partido Acción Nacional de pasar de la resistencia civil a la oposición civilizada, terminó por debilitar la efervescente lucha política escenificada en el Congreso de la Unión por las fuerzas del Frente Democrático Nacio-

nal. Resultado: el 1 de diciembre de 1988 inicia el gobierno de Carlos Salinas de Gortari⁵.

De nuevo los acontecimientos inscritos en el tiempo corto de nuestra historia no pudieron ser explicados desde el tiempo largo. Sin desaparecer del todo la vieja estructura histórica, era evidente que un nuevo relato se estaba construyendo que intentaba romper en definitiva con el pasado. A tropezones se iba desmantelando el viejo orden nacionalista, pero se resistía a morir. El nuevo orden neoliberal de libre mercado se imponía en el terreno de la economía a través del poder, aún vigente, del Estado autoritario que retardaba su reforma, pero se le dificultaba imponer su centralidad en el ámbito ideológico. Los valores en que sustentaba su dominación no le alcanzaban para legitimarse. Seguía compitiendo con los valores nacionalistas que le impedían consolidar su hegemonía y consenso. No resulta extraño entonces que el nuevo gobierno construyera un proyecto nacional alternativo orientado a insertar a México en el mundo global, pero sin abandonar las viejas formas autoritarias del sistema político mexicano. Con esta intención, dos fueron las definiciones ideológicas en las que se apoyó: la *reforma del Estado*, entendida como el reacomodo institucional necesario para impulsar un orden neoliberal, y una nueva idea de incursionar en lo social, concretada en el Programa Nacional de Solidaridad. A la fabricación de este híbrido se le bautizó, en 1992, como *Liberalismo Social*.

Hasta fines de 1993, el proceso mexicano de inserción forzada al mundo global, se distinguió por utilizar los viejos instrumentos de dominación del orden nacionalista: presidencialismo metaconstitucional, partido mayoritario de Estado y esquemas corporativos de control social. Con la protección de este viejo esquema político empleado ahora para enfrentar la nueva situación, la élite modernizadora que encabezó el cambio decidió enmascarar el poder que ejercía marginando a la arcaica clase política priísta que, aunque en aparente desuso, bien podría haberlo legitimado, al menos en forma horizontal. Los herederos del poder en el partido del Estado, comprometidos con el cambio al orden neoliberal, no pudieron, o no quisieron, realizar este tránsito de manera reglamentada y políticamente pactada con los representantes históricos del ejercicio de la dominación en México. Se constituyó un poder tecnocrático que funcionó al margen de la idea de democracia que ideológicamente manejaban; un poder que decide y actúa sin

consultar; un poder enmascarado; un centro oculto de poder que se constituyó alrededor de la recién creada Oficina de la Presidencia. Desde aquí habría de definirse lo que se pensó como el nuevo Estado; desde aquí se elaboraron todos los discursos importantes del presidente: Reforma del Estado y Liberalismo Social; desde aquí se participó, con enorme influencia, en las reformas constitucionales, en la privatización de empresas, en las negociaciones sobre deuda externa y en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos; desde aquí se orientó también la política tributaria y se promovió el adelgazamiento del Estado. Por supuesto, el proyecto de nuevo orden nunca alcanzó a legitimarse, pero de alguna manera sí logró justificarse. La despolitización de buena parte de la sociedad civil, el remedo de representación social que otorgaban los patrones corporativos y, principalmente, la disciplina mostrada por el partido de Estado que, a pesar de las profundas diferencias existentes, le otorgaron el apoyo legislativo necesario para su posible consolidación jurídica, lograron, al menos por unos años, la permanencia política del nuevo poder en manos de una minoría.

En estas condiciones, y a la vieja usanza, no resultó extraño que para fines de 1993 el presidente Salinas echara mano del recurso del *dedazo* para elegir a su sucesor. De momento no hubo sobresaltos. La clase política en pleno aprobó el uso del concentrado poder presidencial. Malo para la democracia. La prepotente actitud adoptada por el primer mandatario, consecuencia de sus aparentes triunfos internacionales, cancelaban la posibilidad de cambios sustanciales al sistema político mexicano. El presidencialismo, el corporativismo y el partido de Estado se sentían reforzados. Todo hacía suponer que, por primera vez en casi 20 años, un gobierno de la República terminaría su periodo constitucional sin inquietantes crisis económicas ni amenazantes rupturas políticas. Bien podría pensarse en ese momento del proceso que, de nueva cuenta, el tiempo largo de nuestra historia volvía a imponerse. Los acontecimientos del tiempo corto parecían encontrar explicación dentro de nuestra estructura histórica. Ligeró fue el juicio. Muy pronto la realidad se encargaría de contradecirlo. Es cierto, en esta etapa del proceso no se advirtió ningún aviso explícito que anunciara la proximidad de una ruptura política. Sólo desde la academia se hablaba de preocupantes indicadores que advertían de la debilidad de nuestra economía, de la fragilidad de nuestra planta productiva y, en especial, de la mudanza en la tendencia de la inversión del capital extranjero que, para este momento, más del 60% se aplicaba en el ámbito especulativo. En los hechos reales, el cambio estruc-

⁵ Véase Luis H. Méndez B. y José Othón Quiroz T., *Modernización estatal y respuesta obrera en México*, UAM-A- Eón Editores, México, 1994.

tural seguía inconcluso lo mismo que la reforma del Estado. Además, de manera soterrada, nada explícita, las contradicciones al interior de la clase política crecían, construyendo, sigilosamente, un nuevo tiempo de coyuntura.

Un primer aviso, ya no oculto, lo constituyó el inmediato cuestionamiento a la designación del candidato priísta a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, por uno de los más importantes miembros de la élite política, Manuel Camacho Solís entonces Regente del Distrito Federal. El cuestionamiento se transformó en lucha exhibiendo públicamente las debilidades internas y externas del grupo que durante el sexenio concentró el poder. Las contradicciones establecidas con la clase política del nacionalismo revolucionario volvieron a hacerse evidentes, y, al interior del grupo cerrado que detentaba el poder, las divergencias abiertamente evidenciadas terminaron por hacer inviables sus proyectos. El segundo aviso se convirtió en coyuntura.

El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, señaló el inicio de un proceso de desestructuración-reestructuración política que, además de advertir sobre la posibilidad de un cambio sustancial sobre las formas como se ejercía la dominación en México, avisó también sobre la eventualidad de inaugurar un nuevo orden. Esta coyuntura, esta promesa de ruptura del orden arbitrariamente impuesto por el salinismo —el liberalismo social— este cuestionamiento a la herencia autoritaria del viejo orden nacionalista revolucionario que el aparato estatal decidió conservar para impulsar sus proyectos globalizadores de liberación económica, convulsionó al sistema político mexicano, impulsó un proceso de revaloración política de varios sectores de la sociedad civil y abrió nuevos espacios para la acción de los partidos políticos. Sin embargo, la coyuntura zapatista no se tradujo en la definición de un nuevo periodo, o dicho más precisamente, la coyuntura se alargó, nuestro tiempo político se hizo incierto. Al momento en que el proceso de pertenencia al mundo global dejó de ser controlado por el aparato de Estado, se creó un gran vacío político sólo ocupado por la violencia. Las aparentes soluciones al quiebre financiero de diciembre de 1994 que habrían de terminar en una monstruosa deuda interna que empobrecería al país, los devastadores efectos de un desarticulado aparato productivo sobre los niveles de vida de la población, los inquietantes movimientos al interior del Poder Ejecutivo, los cada vez más riesgosos conflictos poselectorales y el pasmo institucional hacia el justo reclamo de amplios sectores sociales, fueron en buena medida expresión de un poder fragmenta-

do que orillaron al país a vivir cada vez más frecuentes momentos de ingobernabilidad.

El mandato de Ernesto Zedillo no pudo resolver la indefinición política que vivía el país desde inicios de 1994. Se notaba la ausencia de un orden capaz de otorgar seguridad y confianza, en consecuencia, era evidente la existencia de un poder no consolidado, débil y políticamente incapaz de transformar su fragilidad institucional en orden estabilizado. No bastó el significativo avance en el proceso de democratización del país. La ciudadanía de los procesos electorales y el considerable avance en los procedimientos para hacerlos creíbles, no fue suficiente para lograr estabilizarlo políticamente. Con el levantamiento zapatista empezó a esfumarse el orden pensado como alternativo al nacionalismo revolucionario, el liberalismo social. Debilitado el poder y desdibujado el orden, prevaleció un gran vacío político que comenzó a tomar forma de ingobernabilidad. Inquietantes momentos, cada vez más frecuentes, que, en esencia, manifestaban la incapacidad del aparato de Estado para asegurar las condiciones mínimas orientadas a agilizar los procesos de acumulación y reproducción del capital, su ineficacia para satisfacer las demandas económicas y sociales de la población, y su incompetencia para impartir justicia. Resultado: crisis, cada vez más generalizada, de confianza y credibilidad en las instituciones, y una lucha por el poder al margen de normas y pactos, una lucha regida por la violencia, el asesinato político, el autoritarismo personalizado y el enfrentamiento sin reglas entre los integrantes de la clase política⁶.

Este tiempo corto de nuestro presente histórico —incierto, contingente, riesgoso— comienza a disminuir la fuerza explicativa del tiempo largo de nuestra historia. Sin embargo, su originalidad no le basta para contener aún los elementos definitorios que lo expliquen. Era, y sigue siendo, un tiempo de excepción por indefinido. Un tiempo que construye acontecimientos ambiguos, que se trastocan en situaciones ambivalentes y que terminan por fundar híbridos. Se deshizo el liberalismo social y no hay hasta la fecha proyecto nacional que lo substituya. El nacionalismo revolucionario se desmanteló, pero sus inercias siguen vigentes. El neoliberalismo se impuso como principio rector de las políticas económicas, pero su legitimidad se encuentra permanentemente en entredicho. Nada nos define con claridad. No somos lo que fuimos, pero tampoco lo que

⁶ Véase Miriam Alfie y Luis H. Méndez B., "Orden y centro oculto del poder en México", y Luis H. Méndez B., "Orden e ingobernabilidad", en Luis H. Méndez B. (coordinador), *Poder ideología y respuesta social en México (1982-1996)*, UAM-A- Grupo Editorial Eón, México, 1997.

nos imaginamos, y nuestro tiempo histórico se confunde y se le dificulta su labor de precisarnos, de darnos un nombre que nos identifique.

En esta historia de acontecimientos que con facilidad pierden el sentido, se fraguó un movimiento ciudadano, inclinado hacia la derecha, que favoreció la creación de un nuevo tiempo de coyuntura que habría de resolverse en un momento histórico de excepción, una coyuntura, cuando las elecciones de julio del 2000 llevaron a la presidencia de la República a un candidato de la oposición de derecha, después de 70 años de permanencia en el poder de un partido de origen nacionalista que, a lo largo de tres sexenios, fracasó en su intento por reformar al Estado. Era, se pensó, la oportunidad del cambio, la circunstancia precisa para crear un nuevo pacto nacional que concluyera en la tan ansiada construcción de un orden que nos definiera como nación, el momento justo capaz de especificar el nuevo tiempo histórico que le diera cabida a los acontecimientos del tiempo corto. No fue así, hasta el momento que nos ocupa, el fallido intento por desaforar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, el vacío político creado a partir del 1 de enero de 1994 seguía sin ser cubierto.

En otro lugar aseguramos que, después de 20 años de pertenencia obligada al mundo global,

...seguimos sufriendo las consecuencias de un largo proceso de confusión económica, de atraso político, de indefinición ideológica y de maltrecha identidad nacional. Seguimos atrapados en el fango de la ambivalencia. Eso sí, dentro de una lograda democracia electoral. Por lo pronto seguimos entretenidos en no ser una cosa ni la otra para terminar simulando una modernidad, sustentada en el libre mercado, donde sigue siendo útil jugar a ser populista, necesario fomentar la impunidad, la corrupción, e históricamente placentero, el autoritario ejercicio del poder. Como conciliar el populismo foxista de sus promesas de campaña, de candidato electo y de presidente en funciones, con su fundamentalismo neoliberal; como dar cuenta de la oscura permanencia de los viejos esquemas de dominación para cumplir con los nuevos esquemas globalizadores; como ignorar el todavía frecuente uso corporativo de la fuerza de trabajo para funcionar en modelos de calidad total; como entretenernos con la democracia y ejercer todo tipo de poderes ocultos; como ser neoliberal en una democracia que heredó, entre otras cosas, los atributos metaconstitucionales del viejo presidencialismo mexicano.

Estas son sólo algunas de las muchas contradicciones que nos tienen atrapados en la etapa liminal de un nacional rito de paso que no acaba por resolverse⁷.

Conclusiones

Las distorsionadas formas legales como se urdió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador; la presidencialista solución política del Ejecutivo Federal al conflicto, y los desvirtuados objetivos que persigue parte importante de la clase política en el país, han creado un inquietante tiempo político que anuncia la presencia próxima de una coyuntura que promete, o bien solucionar el largo periodo de la coyuntura alargada iniciado en 1994, la del vacío político y de la ingobernabilidad, con una salida autoritaria, construida por un poder retrógrado, que se afianza desconociendo las limitadas formas de democracia que nos rigen; o bien, concluirlo con la creación de un nuevo proyecto nacional, sustentado en un acuerdo con las principales fuerzas políticas y parte importante de la sociedad organizada, capaz de enfrentar el reto de la reforma del Estado, y, con esto, fortalecer y legitimar las instituciones. Por supuesto, puede suceder también que continúe el régimen híbrido que se viene construyendo, que la ambigüedad y la ambivalencia que nos tutelan sigan confundiendo identidades, deformando nuestro desarrollo económico y pervirtiendo los procesos sociales.

Como quiera que suceda, lo que aquí se pretendió mostrar es que este tiempo de coyuntura y esta posibilidad de ruptura del tiempo histórico con una coyuntura en las elecciones del 2006, no es un hecho aislado, no es un *acontecimiento* en los términos braudelianos, es más bien la continuación de un proceso de construcción de un nuevo tiempo histórico que, desde hace más de cuatro lustros, se mantiene en el terreno de la indefinición; un nuevo tiempo histórico que viene tejiendo una nueva estructura desde la cual, en algún momento, podrán encontrar explicación los *acontecimientos* de un periodo, 1983-2005, que todavía hoy mantienen su ambigüedad y su ambivalencia al no encontrar cabida en un tiempo histórico específico.

De momento, seguimos soportando nuestro ya histórico malestar, nuestra permanente tribulación, nuestra habitual zozobra, ciertos de que la incertidumbre política que nos acompaña seguirá presente.

⁷ Luis H. Méndez B. y Miguel Ángel Romero M., *México: modernidad sin rumbo 1982-1984*, UAM-A-Ediciones y Gráficos Eón, México, 2004, p. 183.